



**SENTENCIA**

<b>PROCESO</b>	Ordinario laboral
<b>DEMANDANTE</b>	María Doris Henao Daza
<b>DEMANDADO</b>	Colpensiones y Protección S.A.
<b>RADICADO</b>	05-001-31-05- <b>016-2019-00416</b>
<b>TEMA</b>	Ineficacia de traslado
<b>DECISIÓN</b>	Adiciona, revoca y confirma sentencia

El veintinueve (29) de abril de dos mil veintiuno (2021), el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, integrada por los magistrados **HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ, CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA** y **GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ**, quien actúa como ponente, previa deliberación del asunto, según consta en el ACTA **099** de discusión de proyectos, procede a dictar sentencia de segunda instancia dentro del proceso ordinario promovido por **MARIA DORIS HENAO DAZA** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES-**, y la **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍA PROTECCIÓN S.A.** con radicado **05-001-31-05-016-2019-00416**.

• **RECONOCIMIENTO DE PERSONERÍA:**

En los términos del poder conferido por el doctor JUAN PABLO ARANGO BOTERO, en calidad de representante legal y de vicepresidente comercial y de mercadeo de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍA PROTECCIÓN S.A., de conformidad con el artículo 75 del Código General del Proceso, el despacho le reconoce personería suficiente para actuar a la Dra. LUZ ADRIANA PEREZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 1.036.625.773 y portadora de la tarjeta profesional N° 242.249 del Consejo Superior de la Judicatura, para que continúe la representación judicial de la entidad hasta su culminación en el presente proceso judicial.

• **PRETENSIONES**

La demandante pretende se declare la ineficacia del traslado al régimen de ahorro individual administrado por PROTECCIÓN S.A por haber faltado esta entidad al deber objetivo de información. En consecuencia, se ordene a PROTECCIÓN S.A a transferir a COLPENSIONES el saldo de la cuenta de ahorro individual incluidos los rendimientos y los aportes realizados al fondo de garantía de pensión mínima y que se condene en costas a las demandadas.

- **HECHOS**

Frente a los hechos manifestó que nació el 02 de marzo de 1966. Que el 9 de abril de 1985 se afilió al ISS a través del empleador IPFEL y realizó aportes hasta el 30 de mayo de 1997, acumulando 526.2 semanas de cotización. Que el 1° de junio de 1997 se trasladó al RAIS con PROTECCIÓN S.A alcanzando al 30 de agosto la suma de 1.092,8 semanas para un total de 1.619,1 semanas de cotización. Que al momento del traslado de régimen, el fondo privado no le suministró información completa, veraz, clara y suficiente sobre las implicaciones reales que conllevaría su traslado y sus implicaciones a futuro en su expectativa pensional. Que elevó derecho de petición a PROTECCIÓN S.A. para que le realizaran una proyección pensional comparada con la que recibiría en el RPM y dicha entidad le comunicó que a los 57 años en el fondo privado solo podría acceder a la garantía de pensión mínima, mientras que en COLPENSIONES tendría una mesada pensional de \$2'851.746. Y que el 29 de abril de 2019 solicitó ante COLPENSIONES el traslado al RPM pero que este le fue negado bajo el argumento que le faltaban 10 años o menos del requisito de edad para pensionarse.

- **CONTESTACIONES:**

✓ COLPENSIONES:

Frente a los hechos de la demanda manifestó que es cierta la fecha de nacimiento de la demandante; que es cierto que estuvo afiliada al ISS y el número de semanas allí cotizadas. Que no le consta los hechos relativos a la afiliación de la demandante con el fondo privado ni la información que este le pudo brindar. Que es cierto que la demandante solicitó ante esta entidad el traslado de régimen, al igual que lo hizo en el año 2014, pero que ambas

solicitudes le fueron resueltas desfavorablemente puesto que le faltaban 10 años o menos del requisito de edad para pensionarse. Se opuso a las pretensiones y presentó como excepciones de mérito la inexistencia de la ineficacia de la afiliación al RAIS, buena fe y la imposibilidad de condena en costas.

✓ **PROTECCIÓN S.A.:**

Indicó que es cierta la fecha de nacimiento de la actora y su afiliación al ISS desde 1985, sin embargo, allí cotizó 521.14 semanas según la historia laboral emitida por la OBP. Que la accionante firmó formulario de afiliación con PROTECCIÓN el 21 de mayo de 1997 y que al momento de la afiliación se le brindó información en debida forma acerca de todas y cada una de las características del RAIS, contrastándolas en todo momento con las características del RPM. Asimismo, se le realizó una proyección verbal de lo que serían sus mesadas pensionales para que la actora tomara la mejor decisión de acuerdo a sus expectativas pensionales. Se opuso a todas las pretensiones y planteó varias excepciones de mérito.

• **SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:**

El 28 de enero de 2020, el Juzgado Decimosexto Laboral del Circuito de Medellín, **DECLARÓ** ineficaz el traslado de la demandante realizado del régimen de prima media al régimen de ahorro individual con solidaridad administrado por PROTECCIÓN S.A.

Como argumento de su decisión expuso que, de acuerdo al desarrollo jurisprudencial expuesto por la Corte Suprema de Justicia, si bien el formulario de afiliación es prueba de un consentimiento, existe una exigencia adicional, la cual consiste en un consentimiento informado, y que la carga de probar que si se brindó una información suficiente, veraz y completa al momento de la afiliación está en cabeza de los fondos privados.

**ORDENÓ** a PROTECCIÓN S.A. a devolver a COLPENSIONES en un término no mayor a 30 días, todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación, incluyendo las cotizaciones, los bonos pensionales, cualquier suma

adicional, frutos e intereses, sin que pueda retener los gastos administrativos, los aportes de solidaridad ni ningún concepto.

**ORDENÓ** a COLPENSIONES a reactivar la afiliación de la demandante al régimen de prima media y a recibir todos los dineros trasladados por el fondo privado.

**DECLARÓ** imprósperas todas las excepciones propuestas por las demandadas.

Y, **CONDENÓ** en costas procesales a PROTECCIÓN S.A.

- **APELACIÓN:**

- ✓ PROTECCIÓN S.A:

En su recurso de apelación, manifestó que no está de acuerdo con el traslado de las cuotas de administración, seguros previsionales y garantía de pensión mínima, toda vez que dicha condena resulta ser sumamente onerosa para la entidad, pues estos conceptos fueron trasladados conforme al destino que les da la ley. Que en este sentido son sumas de dinero que ya no reposan en manos de la AFP, y que si bien resultare procedente trasladar los montos correspondientes a las cotizaciones, gastos de administración, seguro previsional y garantía de pensión mínima, se deben excluir de ello, los rendimientos generados como consecuencia del ejercicio juicioso por parte de PROTECCIÓN S.A como administradora de dichos dineros.

- ✓ COLPENSIONES

La apoderada de COLPENSIONES manifestó en su recurso que, si bien se condena al fondo de pensiones a devolver los dineros de la cuenta de ahorro individual, los rendimientos, los seguros previsionales, no es la equivalencia que se pretende. Que no se pretende solamente que se devuelva los dineros de la cuenta de ahorros, sino que el dinero se hubiera manejado por Colpensiones, es decir, ambos regímenes administran los dineros de una forma diferente y esto produce unos rendimientos mucho más altos en el fondo público que en el fondo privado, por lo que en este sentido, no es solo devolver

lo que le pertenece a la demandante correspondiente a cotizaciones y rendimientos sino este tipo de equivalencia, es decir, como si Colpensiones hubiese administrado el dinero durante el tiempo que estuvo afiliada la demandante al fondo privado.

De igual forma, la anterior decisión se revisará en **GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA** con ocasión de las condenas impuestas a COLPENSIONES.

- **ALEGATOS:**

- ✓ PROTECCIÓN S.A:

Manifestó en sus alegatos que es improcedente la devolución de la comisión de administración, en atención a que este es un descuento autorizado por la ley, el cual da cuenta de que los aportes tuvieron ganancias y fueron debidamente administradas por la AFP, por lo que tiene el derecho a conservar esta comisión como restitución mutua a favor, además con la devolución de este concepto se estaría generando un enriquecimiento sin causa a favor de COLPENSIONES, por recibir una comisión que ni siquiera es destinada a financiar la pensión de vejez de la demandante. Por otro lado, no es procedente devolver los seguros previsionales, toda vez que estos fueron pagados mes a mes a una aseguradora y esta AFP se encuentra imposibilitada para recobrárselo y devolverlo a COLPENSIONES, puesto que la aseguradora es un tercero de buena fe. Solicita se absuelva a PROTECCIÓN S.A de trasladar el valor de las cuotas de administración y seguros previsionales y solo sea ordenado el traslado de la cuenta de ahorro individual, los rendimientos y lo correspondiente al fondo de garantía de pensión mínima.

- **DECRETO 806 DE 2020:**

Atendiendo a lo establecido en el Decreto 806 del 4 de junio de 2020 *“Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”*, artículo 15, la sentencia se profiere escrita.

## CONSIDERACIONES

Los problemas jurídicos a resolver de conformidad con los recursos interpuestos y en grado jurisdiccional de consulta en favor de COLPENSIONES, será: *i)* determinar si el acto jurídico de afiliación de la señora MARÍA DORIS HENAO DAZA a PROTECCIÓN S.A., fue válido, o si por el contrario es ineficaz; *ii)* consecuentemente si procede la declaratoria de la ineficacia, se deberá analizar los conceptos a devolver por el fondo privado y lo referente al bono pensional; *iii)* Y, la operancia o no de la excepción de prescripción de la acción.

***i. Acto jurídico de la afiliación y precedente jurisprudencial en materia de traslado de régimen pensional:***

Para comenzar, esta Sala pasará hacer un recuento breve de la jurisprudencia de esa alta Corporación de Justicia, que estructura el tema.

Advierte la Corte que el traslado de régimen debe estar precedido de toda información relevante para la toma de la decisión. Que es necesario que el fondo de pensiones proporcione a quien pretenda captar como su afiliado, una información suficiente, completa y clara sobre las reales implicaciones que le conllevaría dejar el anterior régimen y sus posibles consecuencias futuras. Que la figura de la ineficacia es una consecuencia prevista en el literal b del artículo 13 de la ley 100 de 1993 para aquellos casos en que el fondo de pensiones omitió suministrar información que permitiera la selección de régimen de forma libre y voluntaria, acto indebido de esta, que tiene como consecuencia no producir sus efectos propios. Que el estatuto Financiero de la época en los artículos 97 y siguientes consagró que las administradoras debían obrar no solo conforme a la ley, sino soportadas en los principios que orientan la buena fe en las que se sancionaba la falta de información relevante.

Más adelante la Corte Suprema de Justicia precisó que son deberes de las administradoras de pensiones, lo siguientes:

- (i) Brindar información en todas las etapas del proceso de afiliación, desde la antesala hasta la determinación de las condiciones para el disfrute pensional.
- (ii) La información debe ser completa y comprensible. Y,
- (iii) La información debe proporcionarse con prudencia, teniendo obligación de buen consejo, que puede llevar incluso a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica.

Si bien los precedentes judiciales tenidos en cuenta por esta Sala corresponden a afiliados beneficiarios del régimen de transición, las razones que sustentan la ineficacia del traslado no tienen en cuenta esa circunstancia, pues el hecho determinante es la falta de información al afiliado.

Así las cosas, lo dicho anteriormente constituye sustento que permite deducir las siguientes reglas:

- (i) Las administradoras de pensiones tienen a su cargo la obligación de información de conformidad con lo establecido en el literal b del artículo 13 de la Ley 100 de 1993.
- (ii) La información del traslado de régimen debe ser de transparencia máxima, detallada y documentada acerca de la incidencia que pueda tener frente a sus derechos prestacionales, de modo que no basta con explicar solo los beneficios que dispense el régimen al que pretende trasladarse, sino además el monto de la pensión que en cada uno de ellos proyecte la diferencia en el pago de los aportes que allí se realizarían, las implicaciones y la conveniencia o no de la eventual decisión y obviamente la declaración de aceptación de esa situación. Y,
- (iii) La carga de la prueba de demostrar que se informó de forma detallada, clara y documentada recae en la administradora de fondos de pensiones.

De igual forma, la Corte Suprema de Justicia fijó unos grados de exigencia de la información, dependiendo de las normas vigentes para la fecha en que se efectúe el vínculo a las administradoras de pensiones, estableciendo en lo temporal los siguientes momentos:

- (i) Desde la fundación de las AFP.
- (ii) Desde la expedición de la Ley 1328 de 2009 y el Decreto 2241 de 2010 incorporado en el Decreto 2555 de 2010.
- (iii) Y, a partir de la vigencia de la Ley 1748 de 2014, Decreto 2071 de 2015. y en la circular 16 de 2016, la cual entrega instrucciones generales para la remisión de información financiera para efectos de inspección, vigilancia y control.

La determinación a tomar, tiene como soporte en la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia en las sentencias 31314 y 31989 de 2008; 33083 de 2011; 12136 y 46292 de 2014; SL9519 de 2015; 47125, SL19447 y SL17595 de 2017; SL3496 y SL4989 de 2018; SL1421, SL1452, SL1688, SL4360 y SL4426 de 2019; STL 3716, STL4001, STL4084, SL2611 y SL2877 de 2020.

En el caso objeto de estudio, sobre los pormenores que rodearon el traslado de la demandante, en el interrogatorio de parte se desprende, que en el año 1997 en la empresa para la cual laboraba, fueron convocados a una reunión por parte de recursos humanos, aproximadamente unas 20 personas, allí les hablaron de las garantías que tenían en PROTECCIÓN S.A., tales como los buenos rendimientos y la posibilidad de pensionarse anticipadamente, además que posiblemente el ISS iba a desaparecer, entonces ante ese riesgo tomó la decisión de trasladarse de régimen. Que no recuerda haber leído detenidamente el formulario antes de firmarlo, pero ella confió en la asesoría que le dieron. Y que no se sintió coaccionada, ya que fue la reunión la que la motivo a pasarse.

Ahora, sobre la carga de la prueba es importante hacer la remisión a la sentencia SL4426-2019, donde la Corte expone los motivos por los cuales las



administradoras deben demostrar que suministraron una información clara y transparente, lo que se explica desde la premisa que el afiliado presenta una afirmación indeterminada *-la de que no recibió información-* y es el fondo a quien corresponde demostrar que cumplió con sus deberes en esa materia, aspecto en el que por demás está en una mejor posición de ilustrar por cuanto debe conservar en sus archivos la documentación que soporta el traslado. Así mismo, contrastando toda la jurisprudencia citada, debe decirse que la carga de la prueba recae en la administradora, puesto que, como entidad especializada, cuenta con los conocimientos para que a través de sus asesores hagan conocer a los afiliados que pretende captar los pormenores de sus situaciones pensionales y las consecuencias que trae elegir el Régimen al que le proponen afiliarse.

Con respecto a lo anterior, las afirmaciones realizadas por la demandante no fueron desvirtuadas procesalmente por PROTECCIÓN S.A., toda vez que, pese a que la entidad administradora anexó el documento visible de folio 107 del expediente, esto es, el formulario de afiliación, mismo que fue suscrito por la demandante, que permite pensar en un principio que si existió una asesoría acerca de cuáles serían los efectos positivos o adversos de trasladarse de un régimen pensional a otro, lo cierto es que este documento no es prueba suficiente para determinar que efectivamente a la accionante se le haya brindado una completa asesoría, acerca de cuáles serían los efectos positivos o adversos de trasladarse de un régimen pensional a otro.

Debe repetirse que la labor de los asesores de los fondos privados, en la etapa pre-negocial, anterior a la materialización del consentimiento, consistía en brindar una información transparente, completa, detallada y comprensible, puesto que, lo que se revisa es si la administradora de fondos de pensiones que pretendía captar a la demandante como su afiliada cumplió con los imperativos profesionales de información.

Vale la pena manifestar que, por el hecho de que la demandante firmara el formulario de vinculación, donde se hace constar que la escogencia del régimen de ahorro individual se efectúa de forma “libre, espontánea y sin presiones”, no implica que conociera las consecuencias que conlleva el cambio de régimen pensional.

También es importante advertir nuevamente, que, si bien la mayoría de los precedentes judiciales tenidos en cuenta por esta Sala corresponden a afiliados beneficiarios del régimen de transición, las razones que sustentan la ineficacia del traslado no tienen en cuenta esta circunstancia, pues el hecho determinante es la falta de información al afiliado.

Se tiene entonces que, PROTECCIÓN S.A., no cumplió con la carga de probar el haber realizado en la etapa previa a la suscripción del formulario de afiliación, una asesoría lo suficientemente clara, detallada y concreta en relación con su situación particular, por tanto, debe concluirse que es desde allí que el traslado resulta ineficaz, generando como consecuencia que la afiliación válida es la efectuada al régimen de prima media, debiéndose en consecuencia **CONFIRMAR** la providencia de primera instancia, en tal sentido.

***ii. Efectos de la ineficacia y conceptos a devolver por los fondos privado:***

Con relación a los **VALORES A DEVOLVER POR EL FONDO PRIVADO**, la jurisprudencia ha indicado que debe darse aplicación al artículo 1746 del Código Civil que gobierna las restituciones mutuas en el régimen de nulidades, con la necesaria precisión de que al tratarse de un tema pensional, el juez del trabajo debe aplicar soluciones que compensen de manera satisfactoria el perjuicio que fue ocasionado a un afiliado por el cambio injusto de régimen pensional y ello implica que la AFP que dio lugar a ello, siempre y cuando se hayan generado las debidas cotizaciones, traslade a COLPENSIONES: (i) la totalidad del capital ahorrado, (ii) los rendimientos financieros obtenidos y (iii) los gastos de administración y comisiones con cargo a sus propias utilidades, pues desde el nacimiento del acto ineficaz, estos recursos debieron ingresar al régimen de prima media con prestación definida administrado por COLPENSIONES.

De igual forma, también debe sumarse que no puede verse afectada la sostenibilidad financiera del régimen de prima media con prestación definida, pues debe garantizarse que COLPENSIONES reciba una suma equivalente a la que hubiese generado con rendimientos financieros, en caso de que la demandante no se hubiese trasladado, y es claro que de acuerdo con la forma como se distribuyen las cotizaciones en el RAIS, parte de ellas se imputaron a

gastos de administración, compañías aseguradoras y el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, sumas que como se dijo no puede ser inferior al monto total del aporte legal correspondiente en caso de que la demandante hubiere permanecido bajo la administración de COLPENSIONES.

Pues bien, conforme a la apelación de PROTECCIÓN S.A., y los alegatos interpuestos, debe precisarse que si bien en primera instancia se condenó a la devolución de las cuotas de administración, hay que anotar que la ineficacia es una respuesta jurídica a la transgresión de un deber legal y ello implica, que el acto jurídico declarado ineficaz carezca de vida jurídica, y, por tanto no produzca ningún efecto, lo cual fue precisado por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia SL-4360 de 2019, en la que indicó que *“la sanción impuesta en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993 consagra una ineficacia en sentido estricto, lo que conlleva que la consecuencia allí contenida es la exclusión de todo efecto al traslado.”*

Por lo anterior, si bien el juez ordenó correctamente a **PROTECCIÓN S.A.** devolver lo correspondiente a las cuotas de administración, también este fondo deberá devolver los seguros previsionales, ambos conceptos debidamente indexados, con cargo a sus propios recursos, y así mismo, lo destinado al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, conforme lo dispone el artículo 7 del Decreto 3995 de 2008 compilado en el DUR 1833 de 2016, debiéndose **ADICIONAR** la sentencia, para en su lugar **ORDENARLE** a **PROTECCIÓN S.A.** incluir en los valores por entregar a COLPENSIONES, estos conceptos.

En lo que respecta a la orden dada por el juez de la devolución del **BONO PENSIONAL** a COLPENSIONES, conforme lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley 100 de 1993, los bonos pensionales constituyen un aporte para conformar el capital que requieren los afiliados del Sistema General de Pensiones para financiar la pensión.

Los bonos tienen varias clasificaciones; importando para el caso que se resuelve el tipo A, que corresponden al afiliado que se traslada del régimen de prima media al régimen de ahorro individual.

Este mecanismo de financiación de la pensión antes de su pago debe surtir varias etapas entre las que se encuentran la emisión, expedición, redención y

pago, en el caso estudiado, el bono pensional se redime el 02 de marzo de 2026, cuando la actora cumple 60 años de edad, y dado que, en la actualidad se desconoce si este ha sido recibido anticipadamente por PROTECCIÓN S.A., lo procedente no es su traslado a COLPENSIONES, sino la restitución del bono a la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para que esta entidad proceda con su anulación, por lo que en este aspecto se **REVOCARÁ** la sentencia de primera instancia.

**iii. Excepción de prescripción de la acción.**

En lo que tiene que ver con la excepción de **PRESCRIPCIÓN**, la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL-1688 de 2019, ha señalado que la prosperidad de la ineficacia es el resultado del incumplimiento de un elemento estructural del negocio, por lo que, al no haber producido efectos, el solo transcurso del tiempo no tiene la virtualidad de integrar los elementos omitidos, postura que comparte esta Sala por lo que debe decirse que no está llamada a prosperar.

Con los argumentos anteriores y atendiendo al principio de consonancia de que trata el artículo 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 35 de la Ley 712 de 2001, esta Sala hizo un pronunciamiento implícito de las alegaciones presentadas.

Así las cosas, se **ADICIONARÁ, REVOCARÁ y CONFIRMARÁ** la sentencia revisada en apelación y en grado jurisdiccional de consulta.

Las costas procesales de la primera instancia como lo dijo el juez. Las costas de la segunda instancia son a cargo de PROTECCIÓN S.A., por no salir adelante su recurso. Las agencias en derecho de la segunda instancia se tasan en la suma de \$908.526.

Por lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

**RESUELVE:**

**PRIMERO:** Se **CONFIRMA** la sentencia de primera instancia en lo que tiene que ver con la declaración de la ineficacia del traslado efectuado al régimen de ahorro individual con solidaridad administrado por **PROTECCIÓN S.A.**

**SEGUNDO:** Se **ADICIONA** la sentencia, en cuanto a los valores a devolver al fondo público, y en su lugar, se le **ORDENA** a **PROTECCIÓN S.A.** a trasladar a **COLPENSIONES**, además de lo ordenado por el juez, los seguros previsionales debidamente indexados, al igual que las cuotas de administración, con cargo a sus propios recursos, así como, lo destinado al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, conforme lo dispone el artículo 7 del Decreto 3995 de 2008 compilado en el DUR 1833 de 2016.

**TERCERO:** Se **REVOCA** la orden dada a **PROTECCIÓN S.A.** respecto a la devolución del bono pensional conforme se dijo en la parte motiva de esta providencia.

**CUARTO:** En lo demás se **CONFIRMA** la sentencia

**QUINTO:** Costas procesales y agencias en derecho, como se dejó dicho en la parte motiva de esta providencia.

Se notifica lo resuelto por **ESTADOS**. De no ser susceptible del recurso extraordinario de casación se ordena devolver el expediente al juzgado de origen.

Los Magistrados,



**GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ**



**CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA**



**HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ**

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR  
DE MEDELLÍN - SALA LABORAL - HACE CONSTAR

Que la presente providencia se notificó por  
estados N° 073 del 30 de abril de 2021

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>